

Movimiento vecinal en 2006: vivienda digna, participación ciudadana e incidencia política de un actor social en redefinición

Marc Andreu

El 21 de diciembre de 2006 la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto convocó una acción de denuncia contra la especulación inmobiliaria de los terrenos públicos de este barrio de Madrid en el marco de la Semana de Lucha por una Vivienda Digna, que culminó el sábado 23 de diciembre en una manifestación de 3.000 personas en la Puerta del Sol reprimida por la policía para evitar una sentada frente al Congreso de los Diputados. El mismo 21 de diciembre, en Barcelona, la Associació de Veïns de Poblenou celebró con el alcalde Jordi Hereu la entrega de 70 pisos de protección oficial construidos por la cooperativa vecinal ProHabitat 2000. Como recordó en público al alcalde el presidente de la asociación de vecinos —a su vez vocal de vivienda de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)—, era un grano de arena, pero nada resolvía esa primera promoción de pisos asequibles en un emblemático y polémico plan urbanístico de la capital catalana, el 22@, que tiene en proyecto 4.000 viviendas protegidas prometidas junto a varios equipamientos mientras, en cambio, ya está haciendo realidad miles de metros cuadrados de oficinas, plazas hoteleras e, incluso, carísimos lofts privados en edificios históricos a proteger. No es de extrañar, pues, que miembros de la FAVB participaran también el 23 de diciembre en la manifestación de entre 7.000 y 20.000 personas que consolidó en Barcelona, al igual que en otros lugares, el movimiento social por la vivienda digna nacido en 2006.

Este paralelismo entre dos acciones concretas de asociaciones de vecinos de Madrid y Barcelona, enmarcado en sendas manifestaciones ciudadanas que sobrepasan el ámbito vecinal aún estando en sintonía con él, sirve como pórtico ilustrativo de la actividad que el movimiento vecinal tuvo en 2006 y de la realidad en la que tuvo (y tiene) que redefinirse. Porque, efectivamente, compartiendo protagonismo con la exigencia de mayor participación ciudadana y con una desigual pero evidente incidencia en la agenda política local, el movimiento vecinal —cuya fuerza y vitalidad va por barrios, ciudades, federaciones y confederaciones autonómicas y que dista aún de haber recuperado la más formal que efectiva coordinación estatal que intentó la CAVE entre 1988 y 2003— fue sacudido en 2006 por lo que el catedrático de Ciencia Política de la UAB Joan Subirats definió como «el año de la vivienda».

Se trata, en palabras de Subirats publicadas en *El País* el 28 de diciembre de 2006, del «poderoso movimiento que ha ido surgiendo en toda España, con especial fuerza en Cataluña, a favor de una vivienda digna» y que, «de manera sencilla y al mismo tiempo contundente e imaginativa», ha puesto de relieve el «claro retraso de la respuesta pública a las acuciantes demandas de vivienda accesible para grandes capas de la población», subrayando que «son los jóvenes en proceso de emancipación y los ancianos que viven solos los sectores con más dificultades de acceso a la vivienda y los grupos más vulnerables a las presiones inmobiliarias y especulativas». Nacido el 14 de mayo de 2006 en espontáneas manifestaciones que, convocadas a partir de correos electrónicos anónimos, reunieron a miles de jóvenes y no tan jóvenes en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y otras ciudades, el nuevo movimiento social se concretó pronto en Asambleas por el Derecho a la Vivienda. Y, hasta las grandes manifestaciones del 23 de diciembre, se fogueó en concentraciones más o menos masivas el 21 y 28 de mayo, el 2 de julio, el 30 de septiembre en Barcelona (entre 5.000 y 15.000 manifestantes) y el 28 de octubre en Madrid (entre 4.000 y 12.000 personas).

Como ha señalado la periodista Clara Blanchar, «el carácter asambleario, descentralizado y al margen de señas o asociaciones como las de vecinos es un aspecto llamativo del movimiento». Sin embargo, y aunque está claro que el nuevo movimiento por el derecho a la vivienda no lo abanderan las viejas y a menudo anquilosadas asociaciones de vecinos, faltaría a la verdad quien afirme que el movimiento vecinal nada tiene que ver en él. Sin ir más lejos, basta con repasar la anterior edición de este anuario y comprobar que federaciones y confederaciones vecinales dedicaron gran parte de 2005 a debatir el Plan de Vivienda del gobierno español.

Pero, para muestra concreta, dos botones de distinto calibre e igual significación. El primero tiene nombre propio: Nacho Murgui, de 34 años, que trabaja en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y es uno de los activistas del nuevo movimiento por la vivienda digna en la capital de España. El segundo botón de muestra son los puntos 3 y 11 del plan de trabajo para 2006 que la FAVB aprobó en diciembre de 2005: «Mantener las líneas de trabajo unitario con distintas entidades ciudadanas

y plataformas» y hacer, con previsión de concretarse en primavera, «un acto conjunto con la Plataforma contra la Violencia Inmobiliaria y la Plataforma por una Vivienda Digna». No está de más recordar que la federación vecinal barcelonesa creó en una fecha tan temprana como 1998 la denominada Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, conjuntamente con los sindicatos catalanes, Càritas, Justícia i Pau y la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), y que en 2000 la plataforma celebró su primer congreso.

Así las cosas, y como recuerda el arquitecto barcelonés Josep Maria Muntaner, en 2006 parece que cobró actualidad la afirmación con la que su homólogo francés Le Corbusier finalizó en 1923 su obra *Vers une architecture*: «La sociedad desea violentamente algo que obtendrá o no obtendrá. Todo reside en eso, todo depende del esfuerzo que se haga y de la atención que se conceda a estos síntomas alarmantes. Vivienda o revolución». Con otras palabras, el geógrafo y urbanista Jordi Borja reformuló la misma idea tras la suspendida cumbre europea de ministros sobre la vivienda que debía celebrarse en Barcelona a mediados de octubre: «La conferencia de ministros temía a 300 posibles manifestantes. Sería lógico que la mayoría de los 300 millones de europeos se manifestara contra los gobiernos que no afrontan la cuestión de la vivienda. Casa y libertad puede ser hoy el equivalente urbano a la justa y revolucionaria consigna campesina de tierra y libertad del pasado» (*El País*, 1/11/2006).

En este contexto, las asociaciones de vecinos del Estado español no están en condiciones de convertirse en ninguna vanguardia revolucionaria. Pero sí, de acuerdo a su desigual realidad en 2006 y a los nuevos aires que la altermunicipalización ha dado a los movimientos sociales, pueden compartir en red con otros actores tanto su trabajo concreto en favor de verdaderos mecanismos de participación ciudadana como su experiencia asociativa urbana de casi 40 años. Seguro que de algo puede servir a la red de movimientos sociales la actualización de las lecciones del potente movimiento ciudadano de los años setenta y de la capacidad de influencia política que, no sólo a nivel local, tuvo la alianza de asociaciones de vecinos, sectores profesionales comprometidos y militantes de otros movimientos sociales y partidos de izquierda.

De hecho, algo de esa actualización hay en la crisis y debate internos desatados en 2006 en la federación de Madrid (FRAVM) y alimentados, en parte, por las luchas vecinales en la capital de España contra los parquímetros, las obras de la M-30 y la tala de árboles del Paseo de la Castellana y, también en parte, por la pugna política contra el alcalde popular Alberto Ruiz Gallardón y la presidenta, también del P P, de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Como algo de ese *aggiornamento* vecinal se percibe también en la práctica que la federación de Barcelona (FAVB) heredó de su crítica al Fórum 2004 y que en 2006 cristalizó en temas tan emblemáticos como la denuncia de la ordenanza cívica de la capital catalana y del nuevo mapa de barrios o la lucha por salvar de la especulación y dotar de uso público el histórico complejo industrial de Can Ricart. Cuestiones, por cierto, todas ellas clave en el desgaste sufrido por el socialista Joan Clos al frente de la alcaldía de Barcelona y cuya sorprendente sustitución por Jordi Hereu, en septiembre de 2006, por vía ministerial y partidista, José Montilla mediante, cabe atribuir también en parte a la capacidad de incidencia política del movimiento ciudadano.

Aunque no está al margen, esta redefinición del movimiento vecinal como actor social en red sí que se sitúa a otro nivel, o cuando menos en paralelo, respecto al proceso de reorganización estatal de la desaparecida CAVE emprendido en 2003, por separado y con ritmos y pretensiones distintas, por el denominado Grupo Coordinador Estatal —integrado por las federaciones y confederaciones vecinales de Galicia, Cantabria, Asturias, Zaragoza, Cataluña, Baleares, Valencia, Madrid y Extremadura—, por un lado, y por la Unión Estatal de Confederaciones —impulsada por las organizaciones vecinales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y La Rioja—, por otro lado. Como se apuntaba anteriormente, la salud y vitalidad del movimiento vecinal va por barrios, ciudades y federaciones y está marcada por las dicotomías (no excluyentes) gestión-reivindicación y colaboración institucional-democracia participativa.

Un diagnóstico general del movimiento vecinal tendería al pesimismo por claros síntomas de agotamiento, anquilosamiento, incapacidad de rejuvenecerse o de mantener su independencia crítica ante los poderes locales, políticos e incluso económicos. Pero una auscultación más detallada permite entrever signos de esperanza, tanto en asociaciones de vecinos y federaciones concretas como en la huella vecinal que dejan o permiten retomar determinadas plataformas territoriales y problemáticas candentes puestas en el candelero mediático a lo largo de 2006 y no ajenas a la batalla por las elecciones municipales de mayo de 2007: la lucha por la vivienda digna y la denuncia de la corrupción y la especulación inmobiliaria. Dos aspectos relacionados entre ellos y también, a su vez, con el movimiento ecologista y de defensa del

territorio. Cabe destacar, al respecto, que el vecinal es de los pocos movimientos sociales no temáticos, sino de raíz territorial, y por ello, aunque lastrado por déficits organizativos, teóricamente más permeable y adaptable a las nuevas realidades y luchas sociales.

Siguiendo con los ejemplos concretos, el 3 de junio de 2006 se dio un doble ejemplo de ello al congregarse miles de personas en Valencia y Murcia en sendas manifestaciones convocadas respectivamente por las plataformas Compromís pel Territori y la que asumió el lema *Murcia no se vende*. Los argumentos de los manifiestos respectivos recogían planteamientos propios del movimiento vecinal, en confluencia con ecologistas y otros colectivos sociales. Así, la plataforma valenciana exige «una alternativa económica y social que respete el territorio, racionalice la gestión del agua, los recursos, la energía y los residuos, propicie una política social de vivienda, enderece la agricultura y garantice la participación» a partir de una ley «elaborada por los ciudadanos que pueda frenar la especulación, proteger el medio y el patrimonio», moratoria urbanística incluida. En Murcia se argumenta: «Hoy en la región de Murcia estamos viviendo una encrucijada. De una parte, tenemos el camino que nos ofrece la hermandad del hormigón, formada por buena parte de las élites gobernantes y las grandes empresas inmobiliarias y constructoras, que pretenden convertir la región de Murcia en un solar ocupado por *resorts*, campos de golf y urbanizaciones. De otra, tenemos el camino de un desarrollo que respete, cuide y trate con inteligencia nuestro territorio, nuestros paisajes tradicionales, nuestros valores culturales y sociales, nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y nuestra calidad de vida».

Planificación urbanística; vivienda social; denuncia de la especulación inmobiliaria; gestión del agua y los residuos; defensa del patrimonio natural, histórico, social y cultural; preocupación por los equipamientos y servicios que contribuyen a la calidad de vida, y demandas de participación ciudadana son aspectos incluidos desde hace tiempo (algunos desde siempre) en la agenda del movimiento vecinal, aunque no de su exclusividad. Y cada vez menos. Pero en algunos casos son las asociaciones y federaciones vecinales quienes, desde su mayor prestigio o articulación organizativa, fruto de su historia, vehiculan demandas y anhelos colectivos que sobrepasan el ámbito estrictamente vecinal. En otro doble ejemplo, esta vez muy distinto, sería el caso de la FAVB, con la crítica a la ordenanza cívica de Barcelona que entró en vigor en enero de 2006; y de la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha, con su demanda ante la comisión legislativa que reforma el Estatuto autonómico, el 27 de noviembre, de introducir la participación ciudadana como elemento rector del texto, de manera parecida a lo que la Confavc ya hizo el año anterior durante el proceso de reforma estatutaria en Cataluña.

Para este último caso merece la pena recordar que, durante la transición, las Cortes negaron a las asociaciones de vecinos la declaración de entidades de utilidad pública (con la consiguiente dotación presupuestaria pública) que sí tienen partidos, sindicatos u organizaciones de consumidores. Y que si bien hoy todas las administraciones se llenan la boca de participación ciudadana, en la práctica se dotan de normativas restrictivas o tienen poca voluntad política de dar juego (con recursos e información) a la participación colectiva crítica y organizada en beneficio de un escaparate participativo mediático, virtual e individualista. La puntilla, en el caso de Madrid, es el decreto del 4 de abril de 2006 por el que el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, dio casi todas las competencias a los concejales de distrito y a los gerentes quitándoselas a los plenos. Un caso parecido de vaciado de contenido se da desde hace tiempo en los plenos de distrito de Barcelona. Obviando la promesa incumplida desde hace dos mandatos por el Ayuntamiento de Barcelona de reglamentar el sufragio universal directo para la elección de los consejeros de distrito, la falta de participación no se ha paliado ni con la reforma de la normativa pertinente ni mucho menos con el nuevo mapa de barrios de la capital catalana. Aprobado en diciembre de 2006 con fuertes críticas de algunos de los propios *expertos* convocados para su elaboración, el nuevo mapa, a diferencia del vigente desde los años ochenta, fue elaborado a espaldas de los vecinos no se sabe bien si como divertimento técnico, distracción electoralista o para atomizar al movimiento asociativo.

Para el caso de Barcelona y su nueva Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público —que así se llama oficialmente la denominada ordenanza cívica—, sólo apuntar lo dicho por el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo en la 34ª asamblea de la FAVB y recogido en septiembre de 2006 en el libro *El barri, espai de convivència*, primer número de la nueva colección vecinal *Quaderns de Carrer*: «Las políticas represivas de los estados democráticos occidentales, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, acostumbra a tener un elemento legitimador común: la eficacia, es decir, la sanción con ausencia de las garantías más básicas. La Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que analizaremos, que tiene el apoyo del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Esquerra Republicana de Catalunya y de Convergència i Unió, es un ejemplo. Y debe situarse en la misma

dirección de las reformas penales del Partido Popular en el año 2003: una seguridad ciudadana entendida exclusivamente como 'seguridad en las calles'. En consecuencia, las personas destinatarias de la represión a todos los niveles son las situadas en los distintos ámbitos de la marginalidad. La protección de los ciudadanos ante las obras públicas sin control, la especulación inmobiliaria y la inseguridad ambiental o alimentaria es secundaria. El objetivo, buscando la supuesta tranquilidad en las calles, serán esas personas que fueron calificadas como 'purria' por el ministro Sarkozy durante las revueltas de Francia».

Si, como ha quedado expuesto, el movimiento vecinal puede vehicular o incluso liderar nuevas formas de entender la participación democrática o la convivencia ciudadana, a nadie debería extrañar que otros movimientos o actores sociales *se inmiscuyan* en temáticas tradicionalmente vecinales. Eso ocurre cada vez más en todas partes y suele tomar la forma de plataformas o colectivos *en defensa de* o *contra* algo. Conviene saber distinguir en ellos el denominado fenómeno *nimby* (*no en mi patio trasero*, en su traducción del inglés) o *cultura del no*, partiendo de la base de que quizá no siempre tienen razón o visión colectiva los vecinos que protestan por algo, en ocasiones incluso con apoyo de determinadas asociaciones de vecinos. El caso de cierta dura oposición vecinal a las salas de venopunción en Barcelona es paradigmático. Con todo, ello no debe servir de excusa para que el movimiento vecinal se encierre en sus esencias y no aborde los necesarios debates de nuevas alianzas sociales en red y de su propia redefinición «sobre la conveniencia de consolidar o reforzar los distintos niveles de organización y representación a través de una gradación que articule y vertebre el movimiento vecinal desde el barrio hasta las instituciones».

La última cita es del documento *Presente y futuro de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid* que la FRAVM elaboró y colgó en internet a mediados de 2006 para abrir un debate que trasciende las fronteras madrileñas. En él se constata que «las asociaciones de vecinos se mueven, cada día más, en una vida lánguida y rutinaria»; que «apenas fluye la información» en el eje vecinos-asociaciones de vecinos-federación vecinal; y que «surgen movilizaciones *inesperadas*» al calor de las cuales «los afectados crean sus propios instrumentos organizativos (plataformas, colectivos...) que no tienen como referente a las asociaciones de vecinos» ni a sus federaciones, produciendo «un enorme desconcierto». De resultados de todo ello, prosigue el análisis, «la oposición se arrima a las plataformas» y cuestiona al movimiento vecinal clásico con el único objetivo de desgastar a la alcaldía —y eso valdría tanto para IU y PSOE en Madrid como para CiU y PP en Barcelona. Y, a su vez, «la crítica cala progresivamente entre los dirigentes vecinales» e incluso «algunas asociaciones de vecinos rompen» con su federación, cuya imagen «se resiente» y, atrapada entre la institución municipal y el radicalismo de ciertas plataformas, debe oír incluso acusaciones de «hacerle el juego» al alcalde de turno.

Con el trasfondo del desacuerdo con la postura oficial de la FRAVM en la lucha contra los parquímetros en los barrios periféricos de Madrid, la oposición al anillo viario de la M-30 o la tala de árboles en el Paseo de la Castellana que en 2006 convirtió a la baronesa Thyssen en ocasional y mediática líder vecinal y ecologista, las asociaciones de vecinos de Vicálvaro, Carabanchel Alto y Aluche han contribuido al debate con argumentos extrapolables al conjunto del movimiento vecinal del Estado español. Tras reconocer que «sólo una pequeña minoría de vecinos participan en las asociaciones de vecinos» y que estas fueron «las primeras en padecer la crisis» asociativa vinculada al desencanto después de la transición, se apunta que «el aumento de las movilizaciones en los barrios, los llamados nuevos métodos organizativos y las nuevas relaciones entre asociaciones y otras entidades son señal inequívoca de esa lenta recuperación que se ha iniciado». Se refieren a la recuperación de un movimiento ciudadano en red cuya peculiar composición «acelera» el choque entre las asociaciones de base y sus federaciones u organizaciones de segundo grado, puesto que cada asociación «cuenta con la autonomía y representatividad suficiente para desligarse de la dirección». Para que ello no pase, al margen de atajar el fenómeno *nimby*, hay que «propiciar debates democráticos entre todas las entidades vecinales y ciudadanas dispuestas a participar sobre la verdadera situación de los barrios, sin vetos, sin cortapisas, con tiempo». Es evidente, prosigue el análisis de Vicálvaro, Carabanchel Alto y Aluche, que «se gastan excesivas energías, tiempo y recursos a participar en todo el entramado de organismos institucionales en los que, además, tenemos escasa influencia y, menos aún, capacidad de decisión real». Pero no siempre y en todos los sitios. A veces, simplemente, lo que falta es gente para cubrir todas las reuniones, sean institucionales o asociativas.

En cualquier caso, hay que adaptarse a las nuevas realidades y, predicando con el ejemplo de la reivindicada democracia participativa, el movimiento vecinal debe colaborar en red con plataformas, entidades, nuevos colectivos y otros movimientos sociales, y especialmente abierto a acoger y defender a

los nuevos vecinos inmigrantes. Sin renunciar a lo que le es propio: una visión alternativa de ciudad habitable y sostenible desde la realidad de los barrios, sus luchas concretas, sus iniciativas ciudadanas y su gestión asociativa. Y sin renunciar tampoco al prestigio social e intelectual, a la interlocución política e institucional y al referente mediático ganado a pulso en sus casi 40 años de existencia.

Al respecto, y como colofón a este repaso (forzosamente parcial y subjetivo) del movimiento vecinal en 2006, sirva como ejemplo (pero sin ánimo de ejemplarizar) la experiencia de la lucha barcelonesa por la conservación y el uso público del histórico complejo industrial de Can Ricart, en el viejo barrio obrero de Poble Nou y justo en medio del nuevo polo económico-tecnológico en desarrollo del 22@ y de la avenida Diagonal recientemente urbanizada hasta el mar. Esta lucha ciudadana, iniciada en 2005 y que se prolongará en 2007, aunó en 2006 todos los elementos que marcan el presente del movimiento vecinal aquí expuestos, así como varias señales esperanzadoras de revitalización, aunque también algunas rémoras y déficits. Salvando las distancias, el urbanista Jordi Borja —teórico de las comisiones de barrio en los setenta, concejal comunista y teniente de alcalde en los ochenta y asesor de Pasqual Maragall en los noventa que, antes ya del cambio de siglo, regresó a sus orígenes críticos y de proximidad con la FAVB— ve en la lucha de Can Ricart una reedición actualizada del potente movimiento ciudadano de la transición. Habrá que ver si no es sólo un espejismo.

En síntesis, la de Can Ricart es una reivindicación articulada en una amplia, plural y asamblearia plataforma ciudadana pero levantada por la asociación de vecinos conjuntamente con el Fòrum Ribera del Besòs —que reúne a vecinos, geógrafos, urbanistas, arquitectos e historiadores— en activa complicidad con la FAVB, profesionales e intelectuales de prestigio, sindicatos, centenares de trabajadores y algunas decenas de empresas afectadas y ya desahuciadas por una operación especulativa privada legitimada por un plan urbanístico municipal. Por encima incluso de criterios políticos —y no digamos ya de un interés general de barrio y de ciudad que pide equipamientos y vivienda social—, en este plan han confluído los intereses inmobiliarios (con un incendio provocado y sin aclaración judicial incluido) y la mediocridad, ignorancia, arrogancia e incluso amenazas de técnicos y responsables municipales. Los de un Ayuntamiento de Barcelona reacio a la participación ciudadana y que sólo acepta rectificar a medias salvando parte de Can Ricart pero salvaguardando entero el beneficio especulativo y el modelo urbanístico y de ciudad no sólo criticado, sino enmendado en positivo por la plataforma ciudadana con elaborados estudios, propuestas y planes alternativos. En este debate, que ha llegado incluso en un reportaje a la televisión autonómica, al gobierno y al Parlamento de Cataluña, además de políticos, técnicos y dirigentes vecinales han terciado desde vecinos de a pie, colectivos de artistas y okupas —hasta que el juez ordenó su desalojo a favor de la propiedad privada, el colectivo La Makabra se adueñó pacíficamente a finales de 2006 de parte del recinto de Can Ricart a punto de ser derruido—, así como profesores universitarios e instituciones culturales catalanas y extranjeras. Entre ellos, el relator especial de la ONU sobre vivienda, Miloon Kothari, que pudo visitar el Can Ricart okupado y cercado por la policía gracias a la mediación de un dirigente vecinal.

Era el mismo enviado especial de la ONU que, tras visitar Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, concluyó en su informe de diciembre de 2006 que «la situación de la vivienda en España es inaceptable» y la especulación y la corrupción urbanística, «desenfrenada». Hasta el punto de calificar lo ocurrido en Marbella de «sólo la punta del iceberg». Por ello, cuesta entender que el gobierno español del PSOE, con la aquiescencia de responsables municipales y autonómicos catalanes, nominalmente de izquierdas, suspendiera a mediados de octubre la cumbre europea ministerial sobre vivienda programada en Barcelona en plena precampaña electoral y con la excusa de no poder garantizar la seguridad ante las movilizaciones sociales convocadas. Como en otras ocasiones, el poder político se asustó ante unos movimientos sociales urbanos que escucha poco y que, cuando no logra instrumentalizar, tiende a criminalizar. Y que, en esencia, están formados por personas, ciudadanos, vecinos, activistas como los que, tres semanas después, protestaron pacíficamente contra el gran salón inmobiliario Barcelona Meeting Point que, éste sí, de ninguna manera se suspendió.

Así las cosas, no es extraño que el enviado de la ONU no se sorprendiera de las manifestaciones por la vivienda digna *in crescendo* en España desde mediados de 2006: «Cualquier gobierno debe entender que si no garantiza el derecho a la vivienda, porque el precio impide pagarlas o alquilarlas, y existen tres millones de viviendas vacías, la gente dé sus propios pasos». Al respecto, aunque no sólo en este aspecto, el movimiento vecinal también dio en 2006 algunos pasos. Y otros que tendrá que dar en el futuro si quiere mantenerse vivo como movimiento social y ciudadano.

* **Periodista e historiador, codirige la revista de la FAVB *La Veu del Carrer*, es redactor de *El Periódico de Catalunya* y coautor, entre otros, del libro *Barcelona en lluita*.**